

Análisis de las diferentes etapas de la alternativa anexionista en el cuadro político puertorriqueño, haciendo hincapié en la actual situación del Partido nuevo Progresista en la crisis general por la que atraviesa la sociedad colonial boricua.

### **Tendencias anexionistas en el proceso político puertorriqueño**

Ilya Villar (1942). Licenciada en Sociología. Ha ejercido la docencia como profesora de filosofía en la Universidad de La Habana, y se ha desempeñado como investigadora en el Centro de Investigaciones de la Economía Internacional (CIEI). Investigaciones suyas han aparecido en distintas publicaciones nacionales. En la actualidad trabaja como Investigadora y jefa del área Caribe del Centro de Estudios sobre América.

Haroldo Dilla (1952). Graduado de Profesor Superior de Historia. Ha ejercido la docencia y la investigación. Ha colaborado en publicaciones nacionales y extranjeras con trabajos sobre temas caribeños. Trabaja como investigador en el Centro de Estudios sobre América.

El presente estudio sobre las tendencias anexionistas en el proceso político puertorriqueño representa un intento de esclarecer el papel que la ideología anexionista ha desempeñado y desempeña todavía en el proceso histórico-político del país.

Como se afirma en el trabajo, por el hecho de constituir el anexionismo una alternativa de la burguesía antinacional actualmente en el poder, los mecanismos de dominación vertebrados tienen un alto grado de subordinación al Estado metropolitano imperialista, y el contexto en que se desarrolla la búsqueda por la afirmación de la nacionalidad resulta eminentemente adverso para las clases explotadas y los sectores progresistas puertorriqueños.

Se ha planteado en más de una oportunidad la necesidad de analizar las bases materiales de la burguesía puertorriqueña para determinar la naturaleza de su dominación. A simple vista parece claro que la estructura económica dependiente, profundizada desde fines de la década del 40 con la penetración masiva de capital norteamericano y la descapitalización creciente de esta sociedad, es el primer obstáculo para la proyección autónoma y nacionalista de esta clase social. No es casual que para entonces el movimiento político liderado por Muñoz Marín ganara a su favor, con el apoyo de amplios sectores sociales, el derecho a ensayar su “proyecto nacional” que, por factores ya ampliamente estudiados por diversos especialistas, tuvo su frustración y sentó las bases para el reforzamiento, en gran medida, del régimen de dependencia personal entronizado por la ayuda federal, con la consiguiente captación de numerosos sectores marginales para el PNP en los recientes procesos de elecciones en Puerto Rico.

Por otra parte, al margen del modelo económico establecido, la burguesía antinacional ha servido de vehículo para instrumentar la penetración cultural y para afianzar la admiración por el modo de vida norteamericano; ha hecho culto a los valores de la ciudadanía norteamericana para los puertorriqueños y del uso del

idioma inglés, y ha tratado de conformar un estado de opinión favorable al desarrollo de instituciones calcadas de la sociedad norteamericana, que nada tienen que ver con las tradiciones históricas de Puerto Rico.

De este modo, la contribución de esta clase al proceso de concientización acerca de las ventajas de la estadidad para Puerto Rico ha sido determinante dentro de aquellos sectores más vinculados y dependientes de las clases dominantes. La argumentación de que el país no es viable económicamente como entidad independiente resalta en el discurso anexionista, además de que en los últimos tiempos se ha puesto especial cuidado por parte de algunos ideólogos de esta tendencia en lo referido al mantenimiento de la identidad cultural puertorriqueña.

Actualmente Puerto Rico, como parte integrante del área caribeña, es quizás el más complejo caso para el análisis del proceso histórico de formación del Estado nacional en esta subregión. Ante todo, porque sobre la base de las relaciones de dominación de tipo colonial existentes entre los Estados Unidos y Puerto Rico no es posible hablar de un Estado en sentido estricto en la colonia.

El aparato colonial actúa como un apéndice o extensión del Estado metropolitano, carente de las más elementales funciones y atributos de esta institución política. Por otra parte, la perpetuación del “Estado libre asociado”, pendiente de ulteriores definiciones en materia política, puede implicar una creciente integración política, militar y económica a los Estados Unidos, al margen de que se concreten más o no las fórmulas anexionistas de la “estadidad federada”.

La década de los 80 nos motiva, por razones que tienen que ver con el proceso político puertorriqueño y con el papel que los Estados Unidos pretenden que el país boricua desempeñe en el área, a una búsqueda de las actuales proyecciones del anexionismo, básicamente en el plano político.

Como podrá observarse, esto no niega una cierta incursión necesaria en la esfera económica y social, con el objetivo de precisar en qué medida esta tendencia política carece de una alternativa o salida a la crisis por la que atraviesa el país.

En la actualidad las fuerzas progresistas, el movimiento obrero aún en fase de recuperación y todos aquellos sectores que están a favor del disfrute de la libre determinación, la independencia y la liberación nacional, son los agentes del proceso de transformaciones sociales y políticas que permitirán sentar las bases para la consolidación del Estado nacional puertorriqueño. Ello, se sabe, no es tarea fácil, porque la solución del problema nacional está íntimamente vinculada a la cuestión social y existe además un serio problema estructural de dependencia económica sin precedentes en el continente americano. Pero parejamente a la dinámica interna de la lucha de clases en Puerto Rico, la política norteamericana para el Caribe y en especial para su colonia es un catalizador de las contradicciones sociales y políticas y un factor de peso en las perspectivas de cambio del país.

Es reconocido que antes de 1898 el anexionismo no fue una corriente político-ideológica de consideración dentro de Puerto Rico. Algunas inclinaciones de las clases dominantes nativas, tales como la admiración por las instituciones norteamericanas y el acercamiento objetivo al mercado estadounidense, allanaron el

camino para el desarrollo de la idea de incorporar la isla a la Unión; pero globalmente la acción política de estos sectores se dirigía a obtener de España el acceso al poder político local para completar así su esquema de dominación clasista.

Los portavoces más lúcidos de los hacendados boricuas comprendieron que la anexión constituía un peligro de muerte para la hegemonía clasista del sector por ellos representado y una amenaza para la cultura y la identidad nacional puertorriqueña. Esta fue la opinión que movió a Mariano Abril a afirmar que con la anexión “tendríamos, sí, trenes elevados que cruzarían nuestras calles, puertos amplios y hermosos (...), movimiento fabril y comercial inusitado, pero todo esto en sus manos (...) porque esas cosas no se forman sino con grandes capitales, que serían capitales yanquis, porque en el país no los hay para tamañas empresas. Y a la vuelta de algunos años, la industria, el comercio y hasta la agricultura estarían monopolizados por los yanquis (...) y tendríamos en cuanto a libertades, ejército yanqui, marina yanqui, policía yanqui y tribunales yanquis, porque todo esto necesitarían ellos para proteger sus intereses”.<sup>1</sup>

Los sectores interesados en la anexión —comerciantes, propietarios agrícolas y profesionales fundamentalmente ligados a los Estados Unidos— eran minoritarios en el conjunto de la política colonial.

Paradójicamente los grupos anexionistas más influyentes militaban dentro del separatismo y se habían hecho fuertes en la “Sección Puerto Rico” del Partido Revolucionario Cubano. Resulta necesario destacar dos cuestiones.

La primera, que tanto la Sección como el Partido —dirigidos por Julio Henna y Tomás Estrada Palma, respectivamente— habían dejado de ser los instrumentos para la liberación nacional de las dos islas, tal como estaba planteado en el proyecto martiano y en las aspiraciones de los independentistas radicales como Betances y Hostos. Bajo la dirección claudicante, pragmática y proyanqui de Estrada Palma, el PRC había perdido las proyecciones internacionalistas que Martí concibió en 1892, y había dejado a un lado la independencia de la isla. De hecho, la gestión de camarilla oportunista dentro del PRC se dirigía a obtener la independencia formal para Cuba y dejar las manos libres a los apetitos norteamericanos sobre Puerto Rico. En una carta a J. A. Frías, González Lanuza, íntimo colaborador de Estrada Palma, definía esta estrategia: “Hoy existe entre Puerto Rico y Cuba cierta oposición de intereses. Es evidente que los americanos proyectan quedarse con lo que hemos convenido en llamar ‘la isla hermana’, ya como Estado, como territorio o como colonia autónoma (...) planteadas las cosas así, nosotros, los cubanos, debemos en absoluto apartarnos del problema puertorriqueño. La más absoluta pasividad respecto a esta isla debe ser nuestra norma de conducta”.<sup>2</sup> Resultan contrastantes estas advertencias con la prédica martiana y el sentimiento general que predominaba en el campo insurrecto cubano,

---

<sup>1</sup> Citado por Ruiz Capote, M.: “El autonomismo como alternativa política en la historia de Puerto Rico.. Trabajo de Diploma. ISRI. 1981.

<sup>2</sup> Este documento está fechado el 15 de Julio de 1898, y fue gentilmente cedido por el licenciado Emilio Godínez.

donde incluso se proyectaba una nueva expedición para llevar la guerra de liberación a Puerto Rico.

De ahí la angustia postrera de Betances, aislado en París de los niveles de decisión del PRC, y las críticas que le formulara a Henna, a quien consideraba “muy yanqui”. Cuando se produjo la ocupación militar de Puerto Rico, Betances instó a la única solución válida: esperar a los invasores con un gobierno y un ejército constituidos. La ocupación norteamericana remodeló las estructuras socioeconómicas tradicionales en función de la nueva inserción de Puerto Rico en la división imperialista de la economía mundial. En el plano concreto esto se tradujo en el arribo al país de una avalancha de inversiones de capitales, la traslación del eje agroexportador del café al azúcar, la expansión del latifundio cañero en detrimento de los pequeños propietarios nativos y la total orientación de la economía insular hacia el mercado norteamericano. Estos cambios socioeconómicos impactaron la estructura social, grosso modo, en tres direcciones:

1. Pérdida de la hegemonía socioeconómica de los hacendados tradicionales, principalmente cafetaleros, los que fueron relegados a posiciones intermedias y sometidos a un proceso gradual de retraimiento sociopolítico.
2. Emergencia y consolidación de nuevos sectores sociales totalmente como prometidos con la burguesía monopolista y sus representantes políticos en el país: empresarios azucareros, comerciantes importadores, burócratas y profesionales.
3. Crecimiento de la clase obrera, debido a la ruina de los pequeños propietarios y a la ruptura de las relaciones paternalistas de sujeción extraeconómica, propias de la economía de haciendas.

Esta remodelación tuvo sus efectos en la reestructuración política del país. De hecho, en los meses finales del colonialismo español los liberales se habían escindido en dos vertientes, una de las cuales —los “ortodoxos o puros”— representaba las aspiraciones de los grupos profesionales interesados en reformas de mayor profundidad que las obtenidas con el pacto Muñoz-Sagasta, y que les permitieran el ascenso sociopolítico a través del control de un Estado moderno. Las dos vertientes del liberalismo dieron lugar a dos entidades partidistas después de 1898: el Partido Federal (liberales) y el Partido Republicano (ortodoxos). De aquí que se pueda trazar una línea de continuidad entre las agrupaciones decimonónicas y las que se forman bajo la dominación yanqui. Pero creemos que esta línea sólo puede tener un valor muy relativo. El reordenamiento político no pudo ser ajeno a los nuevos intereses clasistas originados y, por tanto, al margen de liderazgos, los partidos creados a partir de la ocupación tuvieron bases sociales relativamente diferentes y por consiguiente proyecciones políticas distintas a las de sus antecesores. Dejando a un lado al Partido Socialista, cuyo estudio no abordamos aquí, lo más importante a destacar, a los efectos de este trabajo, fue el surgimiento del anexionismo como corriente política organizada, cuyo expONENTE típico fue el Partido Republicano, liderado por José Celso Barbosa.<sup>3</sup> Este partido obtuvo sus

---

<sup>3</sup> Además del Partido Republicano otras organizaciones contribuyeron a difundir el credo anexionista. Es este el caso de las misiones protestantes, quienes incluían en sus prepredicas la valoración de

componentes políticos iniciales en los antiguos ortodoxos, algunos ex-separatistas e incluso personalidades del incondicionalismo español. Los principales animadores en la arena política del programa republicano, y además los encargados de darle coherencia ideológica, fueron los sectores profesionales e intelectuales, para quienes la anexión a los Estados Unidos ofrecía una magnífica perspectiva de ascenso sociopolítico en la medida de la modernización del Estado y de los cambios en la superestructura en general que ello entrañaba. Los estudios de Quintero Rivera sugieren que en 1904 estos sectores ocupaban el 62,1 % de los puestos directivos del republicanismo, observándose además una tendencia hacia el predominio de los profesionales ligados al Estado o a las grandes corporaciones sobre los profesionales independientes.<sup>4</sup>

Pero los sectores dominantes en el Partido Republicano eran aquellos directamente vinculados al modelo agroexportador de plantaciones azucareras: los grandes latifundistas, principalmente cañeros, dueños de centrales y comerciantes importadores. Los primeros habían logrado sobrevivir a la expansión azucarera de las grandes corporaciones y consolidarse en estrecha vinculación con aquellas, en virtud de los lazos financieros, tecnológicos y de mercados que les unían. En 1930 estos empresarios representaban cerca del 50% de la producción azucarera y actuaban en perfecta armonía con las grandes corporaciones. Los comerciantes importadores también desempeñaron un papel principal. Agrupaban en sus filas tanto a comerciantes criollos —herederos de los grupos mercantiles del Sur—, como a los restos de la antaño todopoderosa burguesía mercantil peninsular. Estos comerciantes tradicionales habían perdido muchos perfiles lucrativos, despojados del monopolio que detentaban, afectados por las reformas crediticias y monetarias y reducidos, de hecho, al comercio importador como meros apéndices de las grandes casas exportadoras norteamericanas. Sin embargo, todavía en 1949 estos individuos detentaban el 60% del comercio mayorista y no es casual que fueran metidos en saco común con los plantadores azucareros por los críticos dirigentes del PPD.<sup>5</sup>

---

Estados Unidos como la fórmula más alta de redención humana, verdad y justicia. Sin embargo, ésta y otras expresiones anexionistas no serán abordadas aquí por no haber sido verdaderas manifestaciones políticas. Ver. al respecto, “La Iglesia Protestante y la americanización de Puerto Rico”, de Emilio Pantojas. En: Revista de Ciencias Sociales, vol. XVIII. marzo-julio, 1974.

<sup>4</sup> Conflictos de clases en política colonial. Cuadernos 2, CEREP, San Juan, 1974

<sup>5</sup> Cochram, Thomas: a Los comerciantes puertorriqueños y el cambio social". En: Revista de Ciencias Sociales, Vol. 1, No. 3, sept., 1957. Resulta interesante observar cómo el líder Independentista José de Diego captó estos fundamentos clasistas del anexionismo. Según el prócer aguadilla no, el anexionismo se basaba en "... las poderosas compañías, los grandes capitales, sus asociados en la red de los negocios, con la fortaleza del ejército a sus órdenes...., y esperaba que estos elementos rewertieran al Independentismo apenas se saturara de azúcar el mercado norteamericano. De Igual manera son notables las críticas hacia la burocracia. “Los administradores norteamericanos”, escribía, “consumen un caudal en licencias con sueldos. automóviles de turismo, expertos en mosquitos de cría y profesores de vacas doncellas”. Ver: Obras Completas, t. 11. ICP, San Juan. 1973.

Tanto los plantadores como los comerciantes importadores cifraban su sobrevivencia en el control político norteamericano de la isla, toda vez que su movimiento económico real tendía a un acercamiento a este polo y porque un Estado nacional controlado por los hacendados atentaba contra sus propios intereses de clase. El credo anexionista del Partido Republicano se puso de manifiesto desde su fundación, cuando proclamaba como objetivo central “desarrollar la civilización, enseñar la lealtad, amar las instituciones norteamericanas y honrar a Washington, Lincoln y Mc Kinley, cuyos nombres son familiares en toda la nación.”<sup>6</sup> El programa político de 1899 estipulaba la imposibilidad de la independencia —dadas las adversidades geográficas y la supuesta incapacidad del pueblo puertorriqueño—, y proponía en su lugar la aceptación del status de territorio que establecía la Ley Foraker, como paso previo a la estadidad, la cual se conseguiría con el progreso (“americanización”) del país. En lo económico el partido recogía el viejo anhelo de los agroexportadores boricuas, el libre comercio con los Estados Unidos, y propugnaba las puertas abiertas a las inversiones norteamericanas. De aquí que los republicanos apoyaran sin reservas la imposición de la Ley Jones de 1917. Desde su vocero *El Tiempo*, Barbosa escribía que “la Ley Jones Shafroth, que es la constitución de Puerto Rico como un territorio organizado de los Estados Unidos de América, es la ley que nos llevará de la mano, fácilmente, sin grandes obstáculos, sin mayores tropiezos, a la incorporación como un estado de la Unión, definiendo así la absoluta y completa personalidad del país en el compuesto político social de la América del Norte”.<sup>7</sup>

Sin embargo, a pesar de ser el portavoz directo del sector nativo de las clases dominantes, el Partido Republicano no era mayoritario y sus confrontaciones electorales con el Partido Unión nunca le reportaron el control de las instituciones políticas electivas. El mayor porcentaje de votos los reunió en 1914 (43%),<sup>8</sup> precisamente cuando la Unión se vio aquejada por serias desavenencias internas. Esta situación, que inflamaba el entusiasmo de los líderes unionistas, no afectaba el verdadero alcance político de los republicanos. De las urnas sólo resultaban la composición de la ineficiente Cámara de Delegados y los gobiernos municipales. El Partido Republicano tenía asegurado, en cambio, el acceso al Consejo Ejecutivo, cuyos miembros norteamericanos y puertorriqueños eran designados por el gobernador norteamericano. Poseía una gran capacidad de presión política en los círculos de decisiones metropolitanos, en el Congreso y cerca del Presidente, bien a través del poderoso lobby azucarero o como sección desde 1903 del Partido Republicano norteamericano.

---

<sup>6</sup> Pagán, Bolívar: Historia de los partidos políticos puertorriqueños (1898-1956), t. 1, Academia Puertorriqueña de la Historia, San Juan, 1972.

<sup>7</sup> Citado por Delgado Cintrón. Carmelo: Historia política de Puerto Rico. Ed. R., Madrid, 1976, p.133.

<sup>8</sup> Informe oficial sobre las elecciones generales de 1972. Junta Estatal de Elecciones, San Juan. De esta fuente provienen los datos estadísticos electorales que se mencionan en páginas siguientes.

Esta participación directa en los mecanismos coloniales de decisión política —lo que permitía subvalorar el regateo electoral—, y la seguridad económica de las clases rectoras del partido —en la medida en que su movimiento real marchaba en el mismo sentido que la lógica del modelo sobre el cual se erigían—, explican que el Partido Republicano haya sido más estable y doctrinal mente más consecuente que su enemigo electoral en el sistema bipartidista establecido en la isla.

El anexionismo, sin embargo, no fue patrimonio exclusivo del Partido Republicano. Dentro del Partido Unión funcionaba un ala conservadora y proimperialista susceptible de adoptar posiciones estadoístas, lo que se puso de manifiesto entre 1904 y 1912 en la famosa “base quinta” del partido. No debe olvidarse que aun cuando la clase dominante en el unionismo haya sido el sector hacendado tradicional, muchos de ellos ya habían establecido relaciones ventajosas con el nuevo modelo económico, y que la propia evolución del modelo tendía a una subordinación de la clase a los nuevos mecanismos de dominación. Las diferencias entre el anexionismo unionista y el republicano son esencialmente retóricas y remitidas a planos tales como la conservación de los valores culturales, el idioma, etc. Tenían su argumento justificativo en el pragmatismo enarbolado por Muñoz Rivera desde el siglo anterior —expresión política de una clase desesperada—, que prefería cualquier solución al status colonial despótico establecido por la Ley Foraker.

Pero en realidad la “americanización” que propugnaba el ala encabezada por Juan B. Huyques y Martín Travieso respondía al acercamiento objetivo de los profesionales y los hacendados más poderosos al modelo económico implementado a partir de 1898. No es casual que en 1914 Travieso integrara el Consejo Consultivo, monopolizado hasta entonces por los republicanos, y que hiciera causa común con ellos. Aunque no es nuestro objetivo, baste señalar que este individuo prestó mejores servicios a los Estados Unidos que cualquier republicano. En 1919, en una carta a Federico Henríquez Carvajal, se autovaloraba como “un leal ciudadano americano” dedicado a “defender el honor de Estados Unidos”.<sup>9</sup>

No obstante, a pesar de la preeminencia política republicana, el anexionismo no fue una alternativa política viable en el período que corre hasta 1930, no sólo por el rechazo electoral que sufría, sino incluso dentro de los planes de dominación imperialista. Su papel fue mucho más modesto: impulsar las medidas necesarias para imponer las estructuras jurídico-políticas imprescindibles al modelo y servir de contraparte en el sistema bipartidista del proyecto político colonial.

Sin embargo, desde la década del 20 comenzaron a observarse con inquietud los comportamientos de los principales índices económicos de la colonia. La producción azucarera, que había crecido ininterrumpidamente desde 1900 —favorecida por las tarifas preferenciales y otros factores externos, así como por la extensión de las grandes corporaciones absentistas y el mejoramiento técnico—, entró en una fase de relativo estancamiento.

---

<sup>9</sup> Fondo Henríquez Ureña. Instituto de literatura y lingüística. Academia de Ciencias, la Habana.

En 1925 la isla había producido 665 000 toneladas de azúcar, cifra que sólo fue superada en 1928, para descender a 587000 toneladas en 1929. En años posteriores la producción creció, y aunque los azucareros habían alegado un aumento de la productividad, los informes de la época concuerdan en señalar una extensión del área de cultivo, bien a expensas de la producción para el consumo, bien a expensas de las tierras baldías. De todas maneras, la producción de 1933 fue ligeramente inferior de la de 1930.<sup>10</sup> De igual manera fueron afectados otros cultivos comerciales. Es un hecho que el ritmo de crecimiento del comercio insular se redujo paulatinamente. Los notables crecimientos de los primeros años de la ocupación —en el quinquenio 1906-1910 el valor del comercio se duplicó con respecto al anterior—, se trocaron en aumentos discretos a partir de 1925, e incluso se redujo el valor total del intercambio en el quinquenio 1931-1935 a los niveles de quince años atrás.<sup>11</sup>

El eje del estancamiento económico residía en el descenso de la tasa de ganancia azucarera, que redujo las nuevas inversiones en el sector y produjo incluso el traslado de los capitales hacia otras áreas, como República Dominicana. Esta crisis estructural se agudizó desde 1934 con la imposición de cuotas de importación de azúcar crudo a los Estados Unidos.

La crisis estructural del modelo de plantaciones azucareras incidió sobre toda la estructura social insular. Mientras el modelo funcionó —aun con las limitaciones inherentes al carácter de enclave de la economía azucarera—, pudo dotar a la sociedad puertorriqueña de cierto dinamismo expresado en posibilidades de ascenso socioeconómico para algunos sectores, cierta cantidad de empleos y, además, expectativas favorables para un consenso general en torno al proyecto político. Desde 1920, cuando el modelo presentó sus primeras grietas irreversibles, sus efectos sociales se contrajeron. El propio hecho de que en la década del 30 las corporaciones absentistas hayan aumentado sus ganancias (La Fajardo las triplicó en 1932), al menos hasta la reducción de cuotas de 1934, sólo puede ser explicado partiendo del descargue de los efectos de la crisis sobre los sectores nativos que hasta entonces habían prosperado, o al menos sobrevivido, al contacto con las plantaciones. Un ejemplo de esto podrían ser las protestas que levantó la decisión de los centralistas en 1934 de no comprar más la caña a los colonos, o las olas huelguísticas que estallaron en la isla en el mismo año. El disloque político entre 1925 y 1940 fue reflejo directo de la incapacidad de las clases dominantes nativas para proponer un modelo económico viable que estableciera sobre bases nuevas el proyecto político de dominación colonial. La estabilidad bipartidista que primó hasta 1924 fue resquebrajada por una serie de combinaciones electorales que armonizaban intereses contrapuestos y hermanaban figuras políticas hostiles. Más importante aún fue la aparición de nuevas fuerzas políticas, tales como el Partido Nacionalista y el Partido

---

<sup>10</sup> Mathew, Thomas: *La política puertorriqueña y el Nuevo Trato*. Editora Universitaria, San Juan, 1970, p. 149.

<sup>11</sup> Sánchez Tarniella, S.: *La economía de Puerto Rico*. Ed. Beyoán, Río Piedras, 1970, p. 76. El autor alerta una posible exageración de los datos.



Comunista, el fortalecimiento del Partido Socialista y la emergencia de las capas medias dentro del Partido Liberal o en tratos directos con el equipo novotratista. El Partido Republicano no fue ajeno a estos malabarismos políticos. La vieja guardia republicana —centralistas, comerciantes importadores, profesionales vinculados a las corporaciones, etc.— mantuvo el control de la colectividad, pero perdió la iniciativa política y la capacidad de regateo que le caracterizó en años anteriores, cuando el azúcar era el elemento axial del crecimiento económico y del mito de la “americanización”. De aquí que el discurso anexionista perdiera su retórica “modernizante” y demagógica —tan propia de la época de Barbosa—, y sufriera notables alteraciones programáticas, al punto en que llegó a sugerir, si bien brevemente, la independencia de la isla. Esto explica que el Partido Republicano sufriera una erosión constante —a diferencia de la estabilidad electoral que le había caracterizado años atrás— en beneficio de su discutible aliado, el Partido Socialista, y del Partido Popular Democrático a partir de 1938. Si entre 1904 y 1917 los republicanos obtuvieron entre un 34,4 y un 43% de los sufragios emitidos, en 1932 sólo reunieron el 29,9% y el 27,7% en 1936. En estos trajines electorales el Partido de la burguesía azucarera fue generalmente acompañado de los socialistas en la conocida coalición que ganó las elecciones en 1932 y 1936, pero precisamente en momentos en que la estadidad distaba de los planes norteamericanos y cuando la administración novotratista prefería pactar con las capas medias emergentes, cuyos representantes más notables eran Carlos Chardón y Luis Muñoz Marín. Aun cuando algunos gobernadores habían coqueteado con la coalición, en esta época el Departamento de Estado trató de dejar claro que se buscaba por otras vías, y con otros grupos, una nueva alternativa colonial, a pesar de que el programa demócrata contenía abiertas alusiones anexionistas.

Cuando el gobernador Gore anunció públicamente las intenciones anexionistas de su gobernación, el Departamento de Estado se apresuró a desmentirlo y a afirmar que “no se considera a Puerto Rico ni siquiera relativamente preparado para la estadidad”. El propio gobernador tuvo que excusarse y declarar que “pasará mucho tiempo antes de que Puerto Rico pueda calificar”.<sup>12</sup>

En realidad si el Partido Republicano pudo mantener cierta capacidad electoral y la ficción de un gobierno local compartido, no fue debido al dinamismo y adaptabilidad de los grupos anexionistas tradicionales, sino al hecho de que no existía una clase o partido capaz de proponer alternativas económicas y políticas viables, sino solamente reformas que dejaban en pie el sistema de plantaciones y que se dirigían a obtener una mejor distribución del excedente.

La situación cambió a partir de 1940. En ese año el PPD —partido populista dirigido por las capas medias emergentes—, se presentó por primera vez a elecciones y obtuvo mayor porcentaje de votos. En ese mismo año el Partido Republicano disminuyó su caudal hasta un 23,9%. En 1944, cuando el PPD formó gobierno con mayoría absoluta, los viejos anexionistas quedaron reducidos a un 17,1%, cifra que

---

<sup>12</sup> Citado por Mathew. Thomas: Op. cit., p. 67.

descendió en 1948 al 13,9%, y en 1952 al 12,8%, cerca de un 6% menos que el Partido Independentista Puertorriqueño. En 1956, aunque aumentó su votación al 24,9%, no había logrado superar aún los niveles alcanzados veinte años atrás. Sin embargo, desde 1956 el Partido Estadista Republicano (nombre de la colectividad desde 1948) comenzó a engrosar su apoyo electoral hasta que en 1968, y más diáfananamente en 1976, logró ocupar el gobierno de la isla.<sup>13</sup>

¿Qué factores determinaron este reflujo del caudal electoral estadista hasta 1952, y a la vez, la reversión del proceso desde 1956 en adelante, al menos hasta 1980?

El factor determinante de este complejo proceso estribó principalmente en el propio modelo económico implementado por el PPD a partir de 1947, y el nuevo proyecto político autonomista que se materializó en 1952 con el Estado Libre Asociado. Ya en 1935 se instrumentó un incipiente modelo de sustitución de importaciones, que tuvo sus principales sostenedores entre los elementos más nacionalistas del PPD, así como en los funcionarios novotratistas encabezados por el gobernador Rexford G. Tugwell. Los años 1941 y 1942 marcaron el punto más elevado del proyecto, cuando se decretó la reforma agraria y se vertebró un plan de estímulo a la creación de empresas estatales cuya producción se destinaba al mercado interno.

Sin embargo, factores externos e internos como la crisis económica de preguerra y de guerra, la inexistencia de la burguesía nacional y la presión de los grupos proimperialistas del PPD, echaron por tierra este intento de sustitución de importaciones. A partir de 1942 fueron evidentes algunos cambios en la política económica de los “populares”,

Desde 1947 el equipo dirigente del PPD renunció al proceso iniciado en 1935 y optó por fomentar la industrialización por invitación a inversiones extranjeras, con la consiguiente apertura de la economía nacional a los monopolios imperialistas norteamericanos. Un año antes, en 1946, Muñoz Marín había expulsado del partido a quienes se mantuvieron fieles a la ideología independentista.

El nuevo modelo económico desarrollista puede decirse que tiene dos etapas:

— una que va desde 1947 a 1965, en que se redefine la economía del país de un capitalismo agrícola cuyo eje era, como hemos visto, la plantación azucarera, a un capitalista manufacturero, cuyo eje principal será la industria liviana (industria textil y del vestido, cueros, cemento).

— la segunda, que comienza a mediados de la década del 60, se desarrolla a todo lo largo de 1970 y tiene su fundamento en el auge de la industria pesada, petroquímica y farmacéutica, entre las principales ramas.

Para ambos períodos, la penetración del capital extranjero fue un factor determinante para la puesta en marcha de estos procesos de industrialización, además de la implantación de un programa de incentivos, entre los que se destacan la exención contributiva y la utilización de subsidios directos y encubiertos. Ingredientes importantes de este modelo lo fueron, además, la creación de una nueva

---

<sup>13</sup> Como se explicará más adelante, el PER adopta un nuevo nombre: Partido Nuevo Progresista (PNP)

infraestructura y, en la primera fase de desarrollo de la industria liviana, la utilización masiva de la abundante y barata fuerza de trabajo puertorriqueña.

Con la creación de la Administración de Fomento Económico en el marco del flamante Estado Libre Asociado, se da impulso a la “Operación Manos a la Obra”, nuevo “modelo” de desarrollo económico cuyos supuestos básicos implicaban desde el inicio la imposibilidad de un desarrollo autónomo o medianamente independiente de los Estados Unidos. El balance de su primera etapa, a pesar de que se registró un alto índice de crecimiento económico superior al 10% entre 1950 y 1965, es pobre. La política de industrialización, desvinculada de la atención necesaria al sector agrícola y desarrollada en función de necesidades foráneas, creó más expectativas de las que podía resolver. Hacia mediados de la década del 60 el crecimiento de la industria liviana comienza a decaer, la inversión de capital norteamericano disminuye y fluye hacia otras regiones del mundo subdesarrollado, la economía puertorriqueña es adicionalmente afectada por medidas proteccionistas de Estados Unidos. Por entonces se observa un incremento del precio de la fuerza de trabajo, fundamentalmente por la acción de las luchas sociales y por el alza notable en el costo de la vida.

Lógicamente, dentro de este cuadro existe una variante que se ajusta a los intereses de las clases dominantes puertorriqueñas y al capital monopolístico estadounidense: desviar la afluencia del capital extranjera hacia ramas con mayor posibilidad de incrementar las ganancias de las empresas transnacionales y que van a orientarse única y exclusivamente al mercado de exportación: refinación de petróleo importado, industria petroquímica y farmacéutica, algo de electrónica.

Con ellos se intenta evitar el colapso definitivo del “milagro económico puertorriqueño” y se contrastan nuevamente cifras de crecimiento industrial, crecimiento de la inversión bruta y del sector público. Son los años de la primera derrota electoral del PPD desde 1940, y de la entrada en el escenario puertorriqueño de nuevas fuerzas políticas. Hacia 1972 el país es sacudido por huelgas y por la violenta represión. Dos años más tarde la crisis económica mundial aportará elementos adicionales a los internos,<sup>14</sup> para agudizar la crisis del “modelo”.

El factor industrialización no sólo dejó intacto el nivel de desempleo crónico en la sociedad puertorriqueña, sino que agigantó la emigración, colocándola a niveles degradantes y sin precedentes en la historia de este fenómeno en el país. Por otra parte, la mejoría sustancial en el nivel de vida de la población ha satisfecho básicamente los intereses de las clases dominantes y sus aliados. El salario del trabajador puertorriqueño es hoy equivalente a un tercio del salario del trabajador norteamericano y se ha profundizado la desigual distribución del ingreso.

Hacia 1977 la inversión directa de los Estados Unidos en Puerto Rico equivalía al 21,1 % de la inversión directa norteamericana en el resto de los países del llamado

---

<sup>14</sup> En 1973 el ritmo de crecimiento económico decayó a un 5,4%: en 1974 a un 3,58%, en 1975 a un 2,4% y en 1976 a un 1,2%. Tomado de Olivieri, Héctor: “Algunas reflexiones sobre modelos de desarrollo y clases sociales en Puerto Rico, siglos XIX y XX”. CEESTEM. 1980, material mimeografiado.

Tercer Mundo, y al 32,7% de la inversión en el resto de América latina. las ganancias netas de los Estados Unidos en Puerto Rico representan en la actualidad el 67% de todas sus ganancias en América latina y éstas son cuatro veces superiores a las obtenidas en 1960 por el imperialismo norteamericano.<sup>15</sup>

En 1978 el valor de la inversión norteamericana en Puerto Rico ascendió a 20 262 millones de dólares, de los cuales 4 241 millones son de inversión financiera en el gobierno colonial; 5 055 millones constituyen inversión directa y 5 320 inversiones en entidades privadas. Las ganancias netas obtenidas por la inversión norteamericana en Puerto Rico ascendieron a 2 460 millones de dólares en 1978.

En la actualidad, se incrementa el peligro de una ofensiva mayor de control y penetración a la economía puertorriqueña, con la probable existencia de petróleo y gas natural en tierra y Litoral.<sup>16</sup>

A principios de 1978 el gobierno colonial de Puerto Rico decide continuar con la exploración petrolera y posponer la decisión de entregar recursos potenciales de petróleo en el mar, a las compañías Mobil y Exxon, básicamente por el conflicto de intereses establecido a partir de la agresividad de estas compañías.

Por otra parte, la First Boston Corporation realiza estudios de viabilidad económica para la explotación del cobre, oro, plata y bauxita de los yacimientos de oeste central, donde también hay propuestas de explotación por la Kennecott Copper Corporation y la American Metal Climax. Además, Puerto Rico posee más del 50% de los recursos conocidos de níquel dentro de los Estados Unidos y sus territorios nacionales.<sup>17</sup>

Como es de esperar, estos problemas son de capital importancia no sólo para el futuro económico de Puerto Rico, sino también para la esfera política, a la que están estrechamente vinculados.

De esta forma, mientras el modelo funcionó y generó esperanzas de progreso social en todas las capas de la población —y en la medida en que su proyecto político satisfizo temporalmente la necesidad de mayor control político de las clases dominantes nativas—, el PPD logró resonantes victorias electorales y el dominio absoluto de la política local.

Pero el proyecto estadolibrista contenía en sí una contradicción. Era un proyecto intermedio entre dos alternativas determinantes: independencia o anexión. Su éxito hubiera residido precisamente en lo que no pudo lograr el PPD: una dinámica económica interna y una evolución política hacia la ampliación de poderes. De aquí que al faltar estos dos elementos mermara la aceptación del modelo y su proyecto, y aparecieran en la escena nuevas alternativas.

---

<sup>15</sup> López, Lerroy y Marcia Rivera Quintero: “Transformaciones y crisis de la economía de Puerto Rico”, En: Cuaderno Tricontinental. no. 121. Ciudad de la Habana. Cuba.

<sup>16</sup> La Mobil Oil y la Exxon han participado en la exploración del petróleo en la Isla y conocen que hay un 85% de probabilidad de presencia petrolera en las áreas de Tortuguero, Dorado y San Juan, además de un potencial petrolero en tierra en el área de Vega Alta-Dorado Toa Baja y bajo el casco de San Juan.

<sup>17</sup> Intervención de Eneida Vázquez en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, 1978

Sin embargo, lo que en un modelo teórico puro hubiera entrañado el ascenso de las dos alternativas, independencia y anexión, en la situación real sólo se dio en la segunda vertiente. La explicación estriba en que mientras el modelo tendía a crear espontáneamente las fuerzas propulsoras de la anexión, a la par reducía las posibilidades de emergencia de un movimiento independentista vigoroso, lo que también se propusieron conscientemente los líderes “populares”. El modelo económico y el proyecto estadolibrista del PPD dieron al traste con el ascenso del movimiento independentista entre 1948 y 1956 y con el desarrollo del movimiento obrero en la década del 40.

El movimiento independentista, que logró altos vuelos en la política local en los años anteriores, tanto en su variante radical como reformista, redujo considerablemente su campo de acción a partir de la instauración del Estado libre Asociado. Aunque en ello influyó la represión desatada por el gobierno, no basta para explicar la regresión del movimiento independentista. Más determinante es el hecho de que el nuevo modelo permitió la cooptación de las clases sociales independentistas, la pequeña burguesía y las capas medias. Incluso muchos independentistas sinceros colaboraron con el PPD en lo que consideraron era un primer paso hacia el establecimiento de un Estado nacional boricua.

Mientras tanto, el brioso movimiento sindical liderado por la CGT fue dismantelado y la joven clase obrera fue arrastrada por la euforia populista hacia posiciones industrialistas, el fraccionalismo y a la sujeción al sindicalismo amarillo norteamericano.

Movimiento obrero y movimiento independentista no pueden ser objeto de análisis excluyentes para los objetivos que nos proponemos. Precisamente la mediatización de ambos factores impidió la confluencia necesaria en una clase obrera independentista que presentara la única alternativa históricamente viable para detener la escalada anexionista. Ésta tuvo sus frutos en la formación del Partido Nuevo Progresista y el copo electoral de 1968.

Esto no implica que Muñoz Marín y su equipo apoyaran conscientemente el desarrollo de fuerzas políticas anexionistas. Pero la realidad es que el PPD pudo afianzar sus posiciones políticas en la medida en que reducía a expresiones mínimas a las fuerzas políticas hostiles al autonomismo, incluyendo aquí a los anexionistas del PER y en menor escala del Partido Socialista. Pero el anexionismo que minimizó el PPD entonces fue una variante del anexionismo como tendencia política, la sustentada por los sectores de la vieja guardia centralista, a la par que generaba nuevas fuerzas anexionistas no menos parasitarias antinacionales y reaccionarias, pero mejor ubicadas como segmentos de la estrategia global imperialista.

La piedra angular de la reanimación de la tendencia anexionista a partir de 1960 fue el fortalecimiento de la gran burguesía antinacional nativa, ligada al proceso de industrialización por invitación. El origen de este sector fue variado: capas medias emergentes, burguesía agrícola y comercial tradicional, etc.; que tuvieron en común la posibilidad de integrarse en calidad de socios menores al nuevo proceso inversionista. En un rejuego constante desde el Estado o en la dirección técnica de las

empresas privadas, estos sectores han logrado adquirir acciones y tomar parte en las grandes empresas monopolistas. Además, también existen familias que actúan como una típica burguesía intermediaria, cuyo representante más genuino es el grupo Ferré. Por estas características preferimos denominarla burguesía burocrático-monopolista, para diferenciarla de otros sectores de la burguesía intermediaria tradicional.

En la medida en que el modelo satisfizo los intereses de este sector social y ofreció suficiente seguridad y protección dentro de los marcos del ELA, la burguesía burocrático-monopolista fue su principal soporte. Pero con la crisis del modelo, y obedeciendo al movimiento real en la esfera económica, parte importante de este sector dominante se ha desplazado hacia las posiciones anexionistas. De esta manera la condición colonial de Puerto Rico ha determinado un alineamiento político singular de sus clases dominantes en torno al status nacional de la isla. A la altura de los conocimientos actuales no es posible un deslinde de los grupos económicos que optan por una u otra solución. No obstante, la hipótesis sostenida por Mattos Cintrón, que plantea al capital improductivo ligado a la alternativa anexionista, resulta sumamente atractiva y sugerente para una definición de tan importante problema.<sup>18</sup>

De todas maneras —y aunque no es tema de estudio en este ensayo—, resultaría bueno señalar que la crisis del modelo desarrollista del PPD ha inducido a la burguesía estadolibrista a pedir la ampliación de los poderes del ELA, para lo cual ha presentado varios proyectos que van desde el Fernós Murray de 1959 hasta las nuevas tesis del Hernández Colón, sin olvidar las tentativas más avanzadas, como las encabezadas por Sánchez Vilella en 1968 y las conocidas posiciones del legislador popular Severo Colberg.

Otro sector social que se desarrolló al calor del proceso de industrialización por invitación fue el de las capas medias. Con el crecimiento industrial y el éxodo rural urbano se produjo un notable incremento del sector terciario.

Asimismo, la burocratización creciente de la esfera productiva y social en general, tanto a nivel estatal como privado, condicionó el desarrollo de nuevos sectores, básicamente urbanos, llamados a desempeñar un papel importante en la base social del régimen. Se calcula que las capas medias puertorriqueñas constituyen alrededor de un 34% de la población.

En ellas habría que considerar no sólo a los profesionales y al personal vinculado a las actividades tecnoburocráticas, sino también a los pequeños y medianos

---

<sup>18</sup> Mattos Cintron. W.: La política y lo político en Puerto Rico. Serie popular Era, México, 1980. Creemos oportuna una aclaración. Aun reconociendo la ligazón intrínseca entre las fuerzas anexionistas en la Isla y en la metrópoli. no nos referiremos a esta segunda Instancia. Las posiciones de los círculos monopolistas norteamericanos acerca del status de Puerto Rico son variables. aunque las opiniones se centran en el mantenimiento del ELA y el anexionismo. Las diferencias de opiniones dependen de los beneficios que obtendrían uno u otro sector con un cambio de status, referidos a variables como el pago del impuesto, el salario mínimo. la seguridad política, el aprovechamiento de fondos federales. etc. Creemos que lo más importante es destacar el considerable peso que tiene la opción anexionista dentro de la clase dominante norteamericana. Desempeña un papel importante en esta orientación el respaldo del complejo militar industrial a la presencia de la marina en la Isla, con las consiguientes consideraciones geopolíticas.

propietarios que han logrado sobrevivir al proceso de desintegración generado por las tensiones del capitalismo dependiente en ascenso.

En líneas generales —y sin desconocer algunas tendencias progresistas en el seno de estos sectores por la heterogeneidad y ambivalencia ideológica que les caracteriza—, suelen convertirse en un factor de peso dentro de las tendencias conservadoras en la sociedad puertorriqueña. Para estos grupos sociales la “seguridad económica” resulta tan intrínseca a su razón de ser, que se ha comprobado su creciente adhesión al movimiento anexionista en la última década. Otro elemento a considerar en el análisis de las capas medias en Puerto Rico tiene que ver con el impacto que el consumismo ha ejercido a través de los diferentes patrones de propaganda, al extremo de que se afirma que en la actualidad constituyen uno de los sectores más enajenados del colonialismo en la isla.<sup>19</sup> Por último, no es despreciable el dato de la vinculación del exilio cubano, después de 1960, a las capas medias insulares; esto a través de la dedicación de los inmigrantes al comercio mediano y pequeño, a las empresas de servicios, a los medios de comunicación, actividades ilícitas, etc. Pero si a la gran burguesía corresponde la dirección, y a las capas medias ofrecer la imagen de la estabilidad, es indudable que la fuerza electoral de masas del anexionismo proviene de los sectores marginales. Si tomamos en consideración que el desempleo real abarca alrededor de 40% de la fuerza laboral y que buena parte de esa población se encuentra en proceso de lumpenización, se puede calibrar la gravedad de este fenómeno. Los estudios realizados por diversos especialistas confirman que los habitantes de los arrabales prefieren votar por el partido anexionista, menos por una actitud consecuente frente al status de la isla que por la búsqueda de una solución a sus problemas inmediatos.<sup>20</sup>

La base del apoyo anexionista en el arrabal estriba principalmente en la desilusión general creada en torno al modelo económico del PPD, la atracción que suscita la retórica populista del PNP y, sobre todo, debido a la implantación masiva de un sistema de dependencia personal a través de, las asignaciones de fondos federales a familias e individuos, y de los cuales se benefician —con la consiguiente degradación política y moral—, cerca del 70% de la población insular.<sup>21</sup>

El Partido Nuevo Progresista surge de la disgregación del Partido Estadista Republicano, lo cual fue el reflejo político del desplazamiento de la vieja guardia centralista de García Méndez por los sectores de la burguesía burocrático-monopolista, interesada en la opción anexionista, que tenía su figura central en Luís A. Ferré. Esta mutación partidista y el ascenso al gobierno colonial de la nueva colectividad se engloban en una crisis política más amplia que sacudió también a las filas autonomista e independentista. Debe tomarse en cuenta que las elecciones de

---

<sup>19</sup> Maldonado. Denis, Manuel : “El imperialismo y la dependencia: el caso de Puerto Rico”.

En: Revista Tricontinental. no. 44, La Habana, 1975, p. 51.

<sup>20</sup> Ramírez. R. L.: "Marginalidad. dependencia y participación política en el arrabal". En: Problemas de desigualdad social en Puerto Rico. Ediciones Librería Internacional, San Juan, 1972

<sup>21</sup> González Díaz, Emilio: “Las bases para el consenso político en la Colonia: el problema de la democracia en Puerto Rico”. En: Casa de las Américas, no. 123, nov.-dic., 1980

1968 contaron con una participación electoral baja (74,4%) con respecto a las de 1964 (82,9%), e incluso a las de 1972 (84,15%). Un estudio pormenorizado de los sucesos políticos entre 1967 y 1974 podría arrojar interesantes resultados en torno a problemas como la relación entre consenso y represión en el funcionamiento político de la colonia. En este sentido el período antes señalado podría resultar el momento crítico de confluencia del agotamiento del modelo, de sus perspectivas de “progreso” y de la carencia de mecanismos paliativos a las contradicciones sociales en una sociedad altamente explosiva por sus altos índices de desempleo, desigualdad, marginalidad y otros males generados en tres décadas de “industrialización”. El peligro de una quiebra de legitimidad del sistema en su conjunto fue encarado por las clases dominantes, sin distinción de partidos, mediante una política represiva. Es justamente en este período cuando más frecuentes son los actos de terrorismo derechista, enfilado contra las organizaciones independentistas y el movimiento obrero. Bandas de delincuentes pagados por el gobierno asaltaron repetidas veces los locales del MPI, el PIP, los sindicatos más combativos y la Universidad, al punto que a la altura de 1972 se registraron 122 ataques terroristas, y el número se incrementó en los meses siguientes.<sup>22</sup> Con similar saña funcionó la represión oficial, canalizada a través de la Guardia Nacional, como sucedió en 1974 durante la brutal represión de la huelga de los trabajadores de los acueductos. También es necesario destacar el papel desempeñado por las agencias de espionaje norteamericanas, que hasta 1971 funcionaron bajo la denominación de Programa de Contrainteligencia (COINTELPRO).<sup>23</sup>

La ola represiva abarcó tanto el período de gobierno penepeísta de Luís A. Ferré como el de su sucesor “popular”. Pero en particular nos interesa señalar dos cuestiones características del primero de ellos. Ante todo, porque en la actualidad Luís Ferré aparece muy activo en la política local y asociado a un ala del PNP que aparenta inclinaciones al diálogo y al respeto por los derechos democráticos. En segundo lugar, porque las condiciones particulares que señalizaron este gobierno penepeísta (1968-1972), permitieron la emergencia en su seno de un grupo facistoide, reclutado dentro de la juventud anexionista, y que sirvió de importante base de apoyo al actual gobernador, Carlos Romero Barceló. Resulta sintomático que muchos de los cabecillas de las bandas terroristas de aquel período aparezcan hoy ocupando plazas en el Senado y la Cámara, y que retomen sus planteamientos agresivos de una década atrás.

El triunfo electoral del PNP en 1968, aun cuando denotó el ascenso del partido anexionista en la política local, fue posible solamente tras la crisis del PPD, que culminó en la formación de un efímero partido autonomista dirigido por Sánchez Vilella, pero que absorbió la suficiente cantidad de votos como para asegurar la mayoría del PNP sobre su contrincante electoral. Por otra parte, el PPD desarrolló

---

<sup>22</sup> Claridad, 9 de Julio, 1912

<sup>23</sup> Pensamiento Crítico. Verano de 1979.



una torpe campaña electoral bajo el nada atractivo lema de esto tiene que seguir, y con un candidato poco carismático, Luís Negrón López. En sus cuatro años de gobernación, Ferré se ocupó de dismantelar buena parte de las estructuras económicas del ELA; esto mediante la instrumentación de fórmulas económicas que viabilizaran la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos. De igual manera, incentivó al sector privado en detrimento del sector estatal de la economía. En 1969 intentó vender la Autoridad Metropolitana de Autobuses y otras empresas públicas, a la vez que repartió tierras del Estado en una burda campaña demagógica. No obstante, el PNP perdió nuevamente la gobernación en 1972 y la fortaleza fue recuperada por el PPD; esta vez a través de un joven líder, Rafael Hernández Colón. Contrariamente a lo que muchos pensaron (en el sentido de que tras la reunificación del PPD vendría una nueva “era popular”), en las elecciones de 1976 la gobernación retornó a manos del PNP. Las causas de la victoria de la colectividad anexionista merecen ser analizadas. Por un lado, el gobierno de Hernández Colón se desgastó rápidamente debido a la crisis económica, al malestar social y a la represión oficial. Por otro, a partir de 1974, cuando se instrumentó masivamente el sistema de dependencia personal a través de la “ayuda federal”, se crearon condiciones socioeconómicas y políticas especiales para el resurgimiento anexionista, con un estilo nuevo; en esta ocasión impulsado por el alcalde de San Juan, Carlos Romero Barceló. La entrada masiva de fondos monetarios para programas sociales y de cupones de alimentos aliviaron las tensiones sociales y generaron nuevas expectativas favorables al sistema. Si en el año fiscal 74-75 más de 135 000 obreros fueron a la huelga, en el siguiente sólo lo hicieron 75 000.<sup>24</sup> En torno al sistema se fue generando un nuevo consenso, pero a diferencia del experimentado en la década del 50 —que basaba el consentimiento popular en las esperanzas de desarrollo económico a través de la industrialización y la autonomía—, se apoyó en un sistema de mendicidad colectiva asegurado por el Estado benefactor, y cuyo proyecto político se encaminaba a la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos. De esta manera, el sector anexionista de la burguesía boricua, afincada en el capital improductivo, extendió sus puntos de vista parasitarios a toda la sociedad a través de la palanca económica de los cupones de alimentos, y cuyo subproducto ideológico ha sido el condimento demagógico de “la estadidad para los pobres”. Esto, que Emilio Pantojas ha llamado “ideología lumpenizante”,<sup>25</sup> merece la atención de los investigadores sociales, sobre todo en la actualidad, cuando sus bases materiales se desmoronan al calor de la nueva estrategia económica diseñada en Washington. Dejando a un lado las diferencias emanadas de ambiciones personales por el poder, es posible distinguir dentro del PNP dos tendencias cuyas contradicciones emergen en ciertas coyunturas propicias. La primera de ellas estaría encabezada por el actual gobernador, Carlos Romero Barceló, y se distingue por posiciones electoralistas en el

---

<sup>24</sup> Pensamiento Crítico, año 1, no. 7, agosto de 1978

<sup>25</sup> Pantojas. Emilio: “Elementos para un estudio de la ideología imperialista en Puerto Rico”, En: La agresión cultural norteamericana en Puerto Rico. Ed. Grijalbo, México, 1980.

sentido de cifrar más esperanzas en el apoyo electoral que en la presión impositiva desde Washington. De aquí que el gobernador, cuya fuerza política fundamental pudiera ubicarse entre los alcaldes penepéistas, tienda a desarrollar un estilo con matices populistas y promesas de igualitarismo, a la par que adopta frecuentes posiciones de fuerza contra los sectores progresistas, muy al gusto de los grupos de extrema derecha dentro del partido. Esta tendencia ha perdido posiciones en el gobierno norteamericano —recuérdese el extemporáneo apoyo de Romero a Carter en 1980—, y se ha distinguido también por lanzar severas críticas contra la actual Administración.<sup>26</sup>

Un punto nodal de estos ataques han sido los cortes de presupuesto que viene implementando Reagan, cuya programación inicial afectaba servicios valorados en 500 millones en 1982 y 1500 millones en 1984.<sup>27</sup> Apenas conocidos estos proyectos, el Comisionado Residente en Washington los denunció estrepitosamente como caóticos, y aunque el gobernador fue mucho más cauto, los calificó de injustos y humillantes, toda vez que supuso que afectarían a Puerto Rico con más crudeza que a los estados norteamericanos. Éste es también uno de los aspectos centrales que caracteriza al grupo de Romero, quien ha sido acusado por sus adversarios —fuera y dentro del PNP—, de promover la dependencia federal hasta niveles escandalosos. La explicación lógica a las preocupaciones de Romero se encuentra en la propia base de su gestión política, la fuerza electoral de la población que vive del “mantengo”, y su débil capacidad de regateo político no sólo en los círculos de poder norteamericanos, sino también en la propia dirigencia de su partido. Esto explica también que Romero haya aplazado la celebración del plebiscito, pues la “principal misión debe ser mejorar la situación económica de nuestro pueblo”, lo que despojado de retórica significa ganar tiempo y consenso en torno a su gobierno, y en última instancia al PNP —muy debilitado en las elecciones de 1980— y fortalecer así sus posiciones en la política local.<sup>28</sup>

Otra tendencia está encabezada por Hernán Padilla y Luís Ferré, y agrupa buena parte de los legisladores penepéistas. El estilo político de este grupo es más apegado a los cánones legalistas y oficialistas con respecto a la política metropolitana, y en especial del Partido Republicano, del que forma su comité puertorriqueño. El alcalde de San Juan, Hernán Padilla, se presenta como la posible alternativa electoral dentro del PNP, en virtud de una carrera política “limpia” y de un mayor apego al estilo del diálogo y el entendimiento, tan ajeno a los encontronazos de Romero. Más fuerte en los círculos de poder de los Estados Unidos, este grupo ha apoyado los cortes presupuestarios de Reagan, necesarios para “enderezar las finanzas”, proponiendo en cambio una ayuda amplia “que desarrolle el capital”, participe en el financiamiento de industrias y actividades comerciales, etc. Al adoptar esta posición, la directiva del Partido Republicano de Puerto Rico expone el estadoísmo a una merma electoral,

---

<sup>26</sup> Ver discurso de Romero el 4 de Julio de 1981. En: El Mundo, 5 de julio de 1981.

<sup>27</sup> Claridad, 27 de febrero al 5 de marzo de 1981

<sup>28</sup> Entrevista a C.R.B. en El Nuevo Día, 21 de junio de 1981

toda vez, que ello redundaría en una afectación drástica a lo que constituye el principal incentivo electoral del PNP: la dependencia personal a la ayuda federal. De aquí que este grupo haya sido más agresivo en sus posiciones anexionistas y haya optado por precipitar la definición del status con una decisión unilateral por parte del gobierno norteamericano: “a clear and positive policy for statehood”.<sup>29</sup> Los opositores al estilo político de Romero sugieren una vuelta al “espíritu del PNP en 1967”, lo que significa una maniobra para acercar al PNP a los sectores más conservadores del PPD.<sup>30</sup>

El enfrentamiento de estas dos tendencias en el seno del PNP no permite vaticinar resultados concretos en cuanto a las posibilidades hegemónicas de una u otra. Por un lado, las encuestas de opinión sugieren un descenso vertiginoso de la popularidad de Romero y un movimiento en sentido opuesto de la figura de Hernán Padilla. Sin embargo, el control del gobierno por parte de la legislatura penepeísta y de los alcaldes municipales ha permitido al actual gobernador salvar algunos escollos y consolidar posiciones. Un ejemplo notable de ello fue el apoyo que recibió por parte de la Federación de Municipios —que agrupa a los veintiséis alcaldes del PNP—, y la censura que el mismo organismo emitió contra Padilla, bajo la acusación de querer socavar la autoridad del gobernador y de negociar los principios del partido con sus colegas del PPD.<sup>31</sup> Es de esperar que, dado el interés reeleccionista de Romero, estas disputas se hagan más agudas según se acerque el nuevo período electoral.

Sin embargo, las diferencias de estilo entre estas dos tendencias no deben crear ilusiones en torno a supuestas ventajas de una sobre otra. Más allá de la retórica liberal o de los planteamientos demagógicos electoralistas, es un hecho que en las actuales condiciones históricas de Puerto Rico no se plantea ningún modelo económico viable capaz de superar la profunda crisis estructural que aqueja a la sociedad colonial.

En la actualidad el llamado “milagro económico puertorriqueño” acusa más que nunca verdaderos síntomas de deterioro y crisis. De septiembre de 1980 a septiembre de 1981 la inflación aumentó casi en un 11 % debido a los aumentos en todos los índices de precios al consumidor, según cifras preliminares del Departamento de Trabajo y Recursos Humanos. El poder adquisitivo del dólar del consumidor se redujo de 42 a 41 centavos de agosto a septiembre de 1981, respecto a su valor de 100 centavos en 1967. Los índices de precios al consumidor más afectados son los de alojamiento, educación y recreación, y en menor magnitud, los cuidados médicos, alimentos y bebidas.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> “Carta del Partido Republicano de Puerto Rico a Ronald Reagan”, pp. 7.8.

<sup>30</sup> Ver al respecto la entrevista y el artículo del senador Orestes Ramos publicados en *El Nuevo Día*, el 8 y 18 de Junio de 1981, respectivamente

<sup>31</sup> *El Nuevo Día*. 23 de Julio de 1981.

<sup>32</sup> Cifras tomadas del diario *El Nuevo Día*, octubre de 1981.

En el marco de —esta afectación socioeconómica, el gobierno, intentando detener la inflación, ha valorado entre otras medidas la utilización de los fondos 936, que constituyen las ganancias de las corporaciones, básicamente industriales, que operan en Puerto Rico, subsidiarias de firmas norteamericanas que están exentas de contribuciones. Según algunos especialistas, estos fondos servirían para aumentar los recursos disponibles para el financiamiento a largo plazo, lo cual posibilitaría un descenso en las tasas de interés y una estimulación a determinados sectores de la economía puertorriqueña.

No obstante, al parecer se ha exagerado por algunos analistas locales el alcance de la utilización de estos fondos; en primer lugar, porque si bien es cierto que mediante determinados mecanismos gubernamentales puede lograr la reinversión de los mismos en la isla, en vez de ser repatriados a las compañías matrices, su utilización para el financiamiento a largo plazo es controvertida, ya que estos fondos se mantienen en Puerto Rico hasta que las corporaciones los trasladan a otros países en busca de mayores ganancias.<sup>33</sup>

Con relación a otros indicadores económicos, según el Eco News, boletín de la Asociación Industriales de Puerto Rico, (AIPR), en su edición de octubre de 1981, el PNB registrará una baja de 1,2% y el salario real personal de 1,0% durante 1981. Se asegura para los meses venideros un crecimiento nulo.<sup>34</sup> El material alude a cómo los recortes en el presupuesto federal no han logrado subsanar los males de la economía estadounidense, y se refiere a la afectación económica que los mismos han introducido en Puerto Rico.

Consecuentemente con la situación por la que atraviesa el país, se incrementan a diario los cierres de fábricas y los despidos masivos. En el pasado año se cerraron 36 000 empleos en general. En abril de 1981 ya existía una sensible pérdida de 6 000 empleos, sólo en la manufactura; hacia noviembre del propio año, cinco centrales azucareros cerraron y dejaron sin empleo a 4 839 trabajadores. Se estima que hay unos 192 000 jóvenes entre 16 y 24 años que ni estudian ni trabajan. En agosto de 1981 la tasa oficial de desempleo era de 21,1 %; según fuentes oficiales, el nivel más alto registrado desde julio de 1977. Según datos de la Puerto Rico Industrial Development Co., citados por una publicación del CIDE, “el trabajador puertorriqueño produce en promedio un beneficio que es 2,37 dólares más alto por cada dólar pagado en concepto de salarios que su contraparte continental”.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> La Sección 936 del Código de Rentas Internas se presenta en estos momentos como un elemento polémico en el sentido del papel que puede cumplir en cuanto a la formación del capital Interno que requiere la economía local. Se estima que estos fondos han generado en Puerto Rico ganancias de alrededor de 3 000 millones de dólares desde que se aprobaron hace algunos años como Incentivo para reinvertir en el país. Sin embargo, por no estar siempre disponibles estos fondos para Inversión local, no constituyen un efectivo seguro hacia esta actividad. De los mencionados 3 000 millones de dólares, unos 1 000 millones han sido repatriados a las compañías matrices y aproximadamente otros 1 000 han sido utilizados en reparaciones de plantas y equipos. quedando para invertir unos 1 000 millones de dólares.

<sup>34</sup> El crecimiento económico en 1979 fue de 2.3%.

La crisis de la agricultura, a pesar de la instrumentación de algunos nuevos programas, se observa al analizar el costo de producción de una libra de azúcar (44 ctvs.) versus su precio de venta (20 ctvs. la libra). Las áreas sembradas de caña se han reducido en un 67% entre 1968 y 1981. En general la producción de azúcar ha descendido en un 76%. En este giro se ha producido una retirada total de la empresa privada y se ha demostrado la ineficiencia del gobierno como administrador de la Corporación Azucarera y de otras instituciones anexas.

En la actualidad escasean la inversión local y la extranjera por el clima de inestabilidad que afecta a los principales sectores productivos de la isla.

En los últimos diez años la inversión real fija se ha estancado.

En lo que respecta a las relaciones comerciales entre los Estados Unidos y Puerto Rico, actualmente se mantiene una estrecha vinculación desigual entre ambas economías, que se traduce en la dependencia de Puerto Rico en un 80% de las importaciones para satisfacer sus necesidades alimenticias. El valor de las importaciones de alimentos supera el 15% de las importaciones totales —alrededor de 1 200 millones de dólares anuales—, y entre ellas se incluyen productos tales como el plátano y el café, para cuya producción existen óptimas condiciones en el país.

Estas manifestaciones críticas en la economía insular se venían produciendo, como hemos analizado, desde fines de los años 60. Pero a partir del ascenso al poder del equipo republicano de Ronald Reagan han aparecido otros factores negativos que han venido acelerando la crisis socioeconómica: la reducción de la capacidad del gobierno para generar empleos y mantener los niveles de asistencia social al reducirse las transferencias federales; la reducción de la capacidad de financiamiento público por las altas tasas de interés; y paulatinamente, con el trato preferencial otorgado a otros países caribeños como Jamaica y República Dominicana y las reducciones de impuestos a las corporaciones en los propios Estados Unidos, se han hecho menos atractivas las inversiones en Puerto Rico.

En particular nos interesa referirnos al primero de los factores mencionados, ya que la “ayuda” federal ha resultado desde 1974 el principal lubricante del proceso político colonial y, sobre todo, la llave maestra de la política económica penepeísta. En el reciente debate efectuado en la Conferencia Bicameral en torno a las reducciones presupuestarias, el gobierno colonial logró limitar las afectaciones presupuestarias para la isla a sólo 44 millones de dólares del total de 1,1 billón proyectado para 1982. Por esta vía se recibirá un monto de 825 millones para el programa de cupones de alimentos. Aun cuando los cabildeos y lamentos de Romero y Baltasar Corrada del Río atenuaron el impacto que hubieran tenido las programaciones iniciales, las reducciones aprobadas afectarán a 200 000 personas aproximadamente, lo que hará descender el porcentaje de puertorriqueños acogidos a beneficencia, aunque siempre éste será más alto que el de cualquier estado norteamericano, de los cuales el más pobre, Mississippi, tiene el 21 % de sus

---

<sup>35</sup> EE.UU.: perspectiva latinoamericana, vol. 6. no. 6, junio de 1981. CIDE. México.

habitantes acogidos al sistema de cupones. Debe señalarse, además, que se establece una nueva reglamentación para elegir a las familias que serían beneficiadas. Aquí, significativamente, se prohíbe la asistencia a pensionistas y huelguistas.

Frente a esta situación el sector anexionista en el poder ha planteado una estrategia económica, aunque con poca coherencia, que apunta hacia la consolidación de las tendencias improductivas y parasitarias del gran capital asentado en la isla. Este programa parte de un principio básico: en la medida en que en los últimos años el papel predominante con relación al desarrollo económico ha sido el del sector público, “se impone la necesidad de ampliar el papel del sector privado en la economía puertorriqueña, estimulando todos los sectores económicos para que aporten su contribución máxima al desarrollo general”.<sup>36</sup>

Asimismo, se pretende impulsar la diversificación del sector manufacturero con más industrias de alta tecnología, sin olvidar la necesidad de mejorar la participación de los fabricantes locales en estas industrias. No creemos que la dificultad de instrumentar tal política requiera demasiados comentarios.

Es reiterativo el tema de la necesidad de “ampliar el comercio internacional, de poner un mayor énfasis en la exportación de productos puertorriqueños y, como base de este esfuerzo, el establecimiento de un Centro de Comercio Internacional, así como la promoción de un Centro Bancario Internacional especializado en los mercados latinoamericanos”.<sup>37</sup>

En este punto puede realmente ubicarse una nueva búsqueda por parte del gobierno colonial de una fórmula adicional de ingresos por la vía de la hipertrofia del sector de servicios, sin abandonar los esquemas tradicionales de “desarrollo” industrial y agrícola.

El vínculo necesario con América Latina y el Caribe en términos de “estrechar los lazos comerciales, industriales, culturales y sociales, en una relación donde tenemos mucho que aportar y mucho que ganar”,<sup>38</sup> es una constante en la prédica anexionista. En relación con el sector agrícola, es evidente que el mismo requiere “un esfuerzo en pro de su diversificación, con nuevas cosechas. allí donde exista el potencial de desarrollo, enfatizando el uso de tecnología moderna, mejorando la calidad de los productos y elevando los salarios del obrero agrícola”.<sup>39</sup> En este sentido sería útil tener en cuenta que una de las contribuciones al desarrollo de la agricultura viene dada por la entrada en el escenario de la United Brands, como garantía del asesoramiento técnico que el gobierno colonial requiere en este terreno.

---

<sup>36</sup> La política económica de Carlos Romero Barceló n. En: El Reportero, abril 21, 1981.

<sup>37</sup> Presente en el Programa de CRB editado por El reportero, como en la entrevista a Ferré y Padilla en el periódico El Mundo, abril de 1981.

<sup>38</sup> Declaraciones del Director de Fomento, José Madera. al órgano de prensa El Nuevo Día. 20 de marzo de 1981.

<sup>39</sup> “La Política Económica de Carlos Romero Barceló”. En: El Reportero, abril 21 de 1981.

La ampliación del mercado turístico y de una infraestructura acorde al desarrollo que se requiere para este sector, es otro elemento del programa económico anexionista. En general, el problema de la creación de nuevos empleos en la industria, el turismo y ciertas áreas de la agricultura aparece en la prensa a lo largo de todo el primer semestre del año 1981 como una constante del programa económico de gobierno del PNP, problema que se conecta con la situación del recorte de los fondos federales que más adelante veremos.

En resumen, los elementos novedosos del programa descansan básicamente en la priorización del sector privado, en la estrategia de desarrollo a seguir y en la expansión de los sectores de servicios y bancarios a partir de la creación de los centros bancarios y de comercio internacional especializados en los mercados latinoamericanos. Puerto Rico se convertiría, así, en un centro de distribución para el Caribe, América Central y América del Sur.

Habría que preguntarse, entonces, si por esta vía realmente se proyecta el verdadero desarrollo para una sociedad en la que el factor de la dependencia colonial y la ausencia de una política estatal defensora de los intereses nacionales han sido determinantes en la política económica de los últimos treinta años. Pero además, en la medida en que la evolución del Estado colonial puertorriqueño ha propiciado crecientemente la integración económica y política del país a las estructuras de la sociedad norteamericana, se hace más difícil a las clases dominantes ofrecer una alternativa económica capaz de satisfacer los intereses de la sociedad en su conjunto, como pretenden los defensores de la estadidad.

Por otra parte, con el papel asignado a Puerto Rico en el marco de las relaciones de dominación imperialista para el continente latinoamericano, ¿qué efectos tendría para el país y para las restantes naciones latinoamericanas esta estrategia que, por cierto, no es el primer intento a vertebrar por el imperialismo norteamericano en la región? Partiendo de estas circunstancias no es difícil comprender la complicación progresiva del proceso político puertorriqueño. La inseguridad, la depauperación paulatina y la evidencia de un futuro incierto cubren el espacio vacío dejado por las corporaciones que emigran y los presupuestos que se recortan. Una encuesta de opinión aplicada por la Human Communication arrojó que el 51 % de los entrevistados opinó que su situación económica empeoraría en los próximos años, mientras sólo el 25% creía en un mejoramiento futuro. Sintomáticamente, sólo el 8% se pronunció por la estadidad.<sup>40</sup> El sistema bipartidista muestra leves pero inequívocos rasgos de agotamiento. En las elecciones de 1980, aun cuando los partidos coloniales acapararon el 94% del sufragio emitido, resultó notable la presencia de decenas de miles de votos mixtos, que rompían las barreras partidistas, muchos de los cuales pasaron a engrosar las candidaturas de los dirigentes socialistas.

El segundo gobierno de Romero Barceló —“ganado” por tres mil votos de ventaja y sobre la base de un escandaloso fraude electoral—, ha abierto “una etapa de

---

<sup>40</sup> El Nuevo Día, 25 de octubre de 1981.

esclerosis y tranque en la vida política del país”,<sup>41</sup> que amenaza con extenderse más allá del actual período de gobernación.

Los votos mixtos y la fluctuación del caudal electoral de los partidos coloniales son el resultado de la quiebra paulatina del encasillamiento partidista, y en última instancia de la afectación de todo el andamiaje político, ideológico y cultural que ha permitido a las clases dominantes mantener su status hegemónico sobre el resto de la sociedad. Pero aún más importante que esto es el ascenso de las luchas populares a través de sus organizaciones sociales, donde cada día es más decisiva la influencia de líderes izquierdistas y progresistas, diferentes a aquellos que en décadas anteriores se ocuparon de canalizar las inquietudes de las masas por las vías dispuestas por el propio sistema de dominación.

Se reeditan ahora muchos de los rasgos de otros períodos críticos de la historia nacional. En el segundo semestre de 1981 el acontecer local ha estado dominado por dos sucesos fundamentales: la huelga de los trabajadores de la UTIER y la ola de protestas estudiantiles en la Universidad.

A la par, surgen nuevamente los grupos facistoides anexionistas. Sin el menor recato, un legislador penepeísta propuso entrar en la Universidad con las bayonetas caladas, mientras otro, al frente de una caterva de pandilleros, bloqueaba el tribunal supremo exigiendo la renuncia de los magistrados y el castigo de los líderes independentistas, a quienes acusaba de “terroristas”. No más cuidadoso fue el gobernador, que bloqueó todas las negociaciones con los huelguistas de la UTIER y calificó de “fascistas” y “comunistas” a los estudiantes, comparándolos con las guardias hitlerianas.<sup>42</sup> Los choques de los estudiantes con la Guardia Nacional han sido frecuentes y varios líderes juveniles han sido llevados ante los tribunales.

Esta nueva coyuntura ofrece buenas perspectivas para el movimiento progresista y revolucionario puertorriqueño, ante todo porque crea las condiciones objetivas para un reagrupamiento político de las fuerzas sociales interesadas en cerrar el paso a la anexión y a las tendencias represivas del partido gobernante.

Pero a la vez no se puede perder de vista que ante las actuales circunstancias los sectores estadoístas de la burguesía nativa acentuarán los esfuerzos para impulsar su proyecto político. El anexionismo sigue siendo hoy un peligro real. Aun cuando el ascenso del Partido Nuevo Progresista haya sido detenido en las elecciones de 1980, es un hecho que su estrategia comparte lugares comunes con las líneas políticas de la

---

<sup>41</sup> Pantojas. Emilio: “Las bases sociales del reagrupamiento político presente”. En: Rolo. 31 de Julio al 6 de agosto de 1981.

<sup>42</sup> Manifestaciones como éstas del gobernador o de los legisladores penepeístas Gonzalo de Jesús, Mislá Alderondo y Freddy Valentín, pueden encontrarse en toda la prensa puertorriqueña entre septiembre y noviembre de 1981. Debemos destacar que Valentín fue el representante de Romero ante el Comité de Descolonización de la ONU. Es significativo que estas actitudes coincidan con la revitalización en octubre de este año del Movimiento Pro Universitario Estadidad. El legislador autonomista Severo Colberg ha denunciado que con su intransigencia Romero pretende una expulsión masiva de estudiantes y profesores hostiles a su gestión y la domesticación anexionista de la Universidad. (El Mundo. 26 de noviembre de 1981).



actual Administración republicana. sobre todo en lo referente a la expansión militarista en el Caribe y su área adyacente. calificada desde 1977 como la “tercera frontera” norteamericana.<sup>43</sup>

La conversión de Puerto Rico en un estado norteamericano daría a esta interpretación una mascarada legal, pues de hecho arrojaría la frontera territorial yanqui sobre el Caribe Oriental y Estados Unidos quedaría convertido en un país caribeño. Resulta interesante observar cómo Romero Barceló ha tratado de ganar el espacio perdido en 1980 —cuando se afilió al Partido Demócrata—, coqueteando con los círculos del Pentágono, cuyas bases y enclaves militares en la isla son objeto de fuertes debates políticos y de protestas populares. Incluso, en una maniobra calificada despectivamente hasta por sus propios colegas de partido, durante su visita a Europa en marzo de 1981 hizo un llamado a contener la expansión comunista en el Caribe —cuyos centros subversivos ubicaba en Cuba, Nicaragua y Granada—, para lo cual reservaba un lugar especial al esfuerzo común de Puerto Rico y las colonias francesas.<sup>44</sup>

Es indudable que este entroncamiento del papel puertorriqueño en el Caribe con las estrategias agresivas del gobierno norteamericano constituye un soporte para la anexión, aun cuando la definición plebiscitaria pase a un segundo plano, tal y como lo han sugerido los representantes penepetistas en el Partido Republicano.

Recientemente el vicepresidente norteamericano y exjefe de la CIA. George Bush, dio un fuerte espaldarazo a los anexionistas al declarar que la administración Reagan acelerará la incorporación de la isla como un estado de la Unión. Descontando el impacto publicitario que pudieran tener estas declaraciones —Bush ganó las primarias republicanas en la isla—, no se pueden obviar las grandes implicaciones que encierran.

De ahí que se plantee a las fuerzas políticas y sociales anticolonialistas una tarea impostergable: enfrentar la escalada antinacional de los sectores anexionistas de las clases dominantes con propuestas amplias que logren reagrupar fuerzas en una estrategia común. Para los pueblos de América latina y el Caribe la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos entraña un grave peligro para el movimiento revolucionario y progresista. no sólo por las afectaciones en el orden sentimental, moral, cultural, etc. —que son de por sí un sagrado compromiso—, sino por las consideraciones geopolíticas y agresivas que esta estrategia envuelve. Nuestros pueblos tienen ante sí una tarea histórica, en la cual desempeñan los estudiosos sociales una importante función: la denuncia constante en el plano internacional de la escalada anexionista y la solidaridad con la lucha por la reafirmación nacional y por la independencia de Puerto Rico.

---

<sup>43</sup> Pierre-Charles. Gerard: “La tercera frontera”. En: Diálogo social, año XIV, no. 137. agosto de 1981.

<sup>44</sup> The San Juan Star. April 3, 1981.